

Editorial

Dudas y tensiones por proyecto de ley miscelánea

El anuncio realizado el miércoles por el Presidente José Antonio Kast sobre el envío de un proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, que también ha sido denominado proyecto de ley miscelánea, no ha pasado inadvertido en la Región del Biobío. Por el contrario, ha abierto un intenso debate político y social marcado por la urgencia de la reconstrucción tras los incendios forestales y por la incertidumbre respecto del contenido de la iniciativa que finalmente sea ingresada, que aún no ha sido ingresada al Congreso y cuyo texto íntegro se conocerá recién en los próximos días, según se ha informado desde el Gobierno.

El diseño del proyecto, tal como ha sido adelantado por el Ejecutivo, contempla cinco ejes legislativos que combinan medidas de reconstrucción con reformas económicas de mayor alcance. Entre sus principales propuestas se incluyen temas tan diversos como relevantes, ya que se encuentra la ampliación del Fondo de Emergencia en \$400 mil millones para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales de enero pasado en las regiones de Biobío y Ñuble; una rebaja transitoria de impuestos a las donaciones; incentivos para la repatriación de capitales con una tasa del 10% durante 12 meses; la exención temporal del IVA a la venta de viviendas nuevas; y la disminución gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, a 2029, junto con la reintegración del sistema tributario.

A ello se suman medidas orientadas a dinamizar la inversión y el empleo, como la reducción de plazos para permisos sectoriales y la intención de empujar el crecimiento económico hacia un 4% anual, con una meta de desempleo del 6,5%. Se trata, en suma, de un paquete ambicioso que no solo aborda la reconstrucción, sino que también introduce cambios estructurales en materia tributaria y económica.

Sin embargo, la preocupación central no radica únicamente en el contenido adelantado, sino en la forma en que se ha planteado la iniciativa. La decisión de agrupar más de 40 medidas en un solo proyecto ha generado resistencias transversales en la Región del Biobío. Parlamentarios de distintos sectores han advertido que mezclar reconstrucción con reforma tributaria puede ralentizar la tramitación y, lo que es más delicado, condicionar la llegada de recursos urgentes a las familias afectadas.

Ese punto es especialmente sensible en comunas como Penco y

Tomé, donde la reconstrucción sigue siendo una necesidad inmediata. El proyecto, al vincular la recaudación de fondos para este proceso a un conjunto más amplio de medidas económicas, introduce un elemento de incertidumbre que preocupa tanto a autoridades locales como a los propios damnificados. En la práctica, se instala la duda de si la ayuda para los damnificados llegará con la rapidez necesaria o si quedará supeditada a negociaciones políticas más complejas.

Las reacciones en la zona reflejan esta tensión. Mientras algunas autoridades defienden la iniciativa como un instrumento necesario para reactivar la economía y asegurar recursos, otras voces, incluyendo parlamentarios oficialistas y de oposición, han planteado la necesidad de separar la reconstrucción del resto de las reformas. El argumento apunta a que la urgencia social no puede quedar atrapada en una discusión tributaria de mayor alcance.

Desde el propio Ejecutivo se ha reconocido que no existen "planes B o C" definidos, lo que incrementa la presión sobre una iniciativa que, por su amplitud, podría enfrentar un camino legislativo más lento de lo esperado.

A ello se suma un elemento adicional que complejiza el escenario y es la ausencia de un plan alternativo explícito en caso de que el proyecto enfrente dificultades en su tramitación. Desde el propio Ejecutivo se ha reconocido que no existen "planes B o C" definidos, lo que incrementa la presión sobre una iniciativa que, por su amplitud, podría enfrentar un camino legislativo más lento de lo esperado.

En este contexto, el Gobierno ha optado por una apuesta de alto riesgo, que significa avanzar con un proyecto integral que busca, al mismo tiempo, responder a la emergencia social y redefinir aspectos clave de la política económica. La estrategia puede tener lógica desde una mirada estructural, pero enfrenta un desafío político evidente, ya que se deben lograr acuerdos amplios en un Congreso donde ya han surgido dudas y críticas significativas.

El riesgo, sin embargo, no es solo político, es también profundamente humano. Condicionar su proceso de reconstrucción a la aprobación de un paquete legislativo amplio puede terminar prolongando una espera que, según se ha dicho, ningún actor político o social quiere que sea demasiado larga.

Más allá de si este proyecto o cualquier otro es el camino adecuado, lo fundamental es que las decisiones políticas no terminen profundizando la incertidumbre de quienes lo han perdido todo, que ya debieron enfrentar un alto nivel de preocupación por el cambio de Gobierno.